



Junta de Transparencia y Ética Pública

RESOLUCIÓN N°267/2025 de 22 de mayo del 2025

VISTO: los recursos administrativos de revocación y anulación en subsidio, interpuestos por la Sra. Carolina Ache y [REDACTED] contra la Resolución de JUTEP N° 1132bis/2024 de fecha 26 de setiembre de 2024. -----

RESULTANDO: **1)** que, con fecha 21 de setiembre de 2022, la Sra. Carolina Ache y [REDACTED] presentaron a JUTEP petición donde solicitan se mantenga la reserva de su declaración jurada presentada [REDACTED] - [REDACTED] de la Sra. Carolina Ache, conforme a lo dispuesto en la ley y en las reglas de derecho emanadas de la Constitución de la República; -----

2) que, por Resolución de JUTEP N° 1132bis/2024 de fecha 26 de setiembre de 2024; se resolvió desestimar la petición formulada, en el entendido de que el ciudadano que opta por disputar un cargo como el que ostentaba la obligada Sra. Ache conoce de antemano las reglas de juego establecidas, entre las que se destaca precisamente la publicidad de las declaraciones juradas conforme a lo dispuesto en la normativa que las regula;---

3) que, de conformidad con lo que dispone el artículo 12 de la Ley 17.060, la declaración jurada del obligado deberá contener una "relación precisa y circunstanciada de los bienes muebles e inmuebles propios del declarante, su cónyuge o concubino, de la sociedad conyugal o de la sociedad concubinaria de bienes que integran y de las personas sometidas a patria potestad, tutela o curatela". Por tanto, la declaración jurada es una única declaración, que es la del obligado y que debe contener los elementos reseñados por la norma; -----

4) que, cuando se procede a la apertura de una declaración jurada que por ley debe ser pública, se incluyen todos los elementos que debe tener la declaración jurada de conformidad con lo dispuesto por el artículo 12, por tanto; comprendiendo la relación de los bienes del cónyuge, sin que influya

la existencia o no de separación de los bienes, ya que la ley no distingue ni especifica dicha situación jurídica; -----

5) que, los comparecientes fundamentan su impugnación en los siguientes agravios: -----

5.1- Los recurrentes consideran que el acto atacado merece la calificación de ilegítimo en los términos previstos por el artículo 23 literal a) del Decreto-Ley N° 15.524 de 09 de enero de 1984. -----

5.2- La ilegitimidad es entendida en base a: a) Incorrecta interpretación del artículo 12 bis de la Ley 17.060 y b) Violación del derecho a la privacidad del [REDACTED] -----

5.3- a) Incorrecta interpretación del artículo 12 bis de la Ley 17.060: Expresan los recurrentes que, con carácter general la Ley 17.060, obliga a los funcionarios comprendidos en sus artículos 10 y 11 a presentar una declaración jurada de bienes e ingresos con determinado contenido que involucra, no solo a sus bienes e ingreso, sino también a los de su cónyuge o concubino. -----

5.4- Agregan, además, que si bien se impone la presentación de la información – y que ambos cumplieron- la misma debe ser tratada en forma confidencial respecto [REDACTED] No se trata de cuestionar el fin loable que persigue la JUTEP ni las políticas de transparencia correspondientes o la normativa que la misma aplica. Sin embargo, la publicidad de la información está expresamente prevista en el artículo 12 bis, dejando fuera a los cónyuges de los funcionarios que ocupan los cargos allí reseñados. -----

5.5- Concluyen que la información correspondiente al cónyuge queda excluida de la información a publicar por la JUTEP, arribando a una conclusión errónea cuando en el Considerando IV) de la Resolución N° 1132bis/2024 de fecha 26 de setiembre de 2024 expresa: “una relación de los bienes del cónyuge, sin que influya la existencia o no de separación de bienes, ya que la ley no distingue ni especifica dicha situación jurídica”. -----

5.6- b) Violación del derecho a la privacidad [REDACTED]: Expresan los recurrentes que la tutela del derecho a la privacidad tiene varias derivaciones, entre las que se encuentran dentro de éste, los derechos al honor, a la intimidad, y a la propia imagen, así como la protección del domicilio, las comunicaciones,



Junta de Transparencia y Ética Pública

correspondencia de cualquier tipo y papeles de los particulares, derecho este que se encuentra recogido en el artículo 72 de nuestra Constitución.-----

5.7- Agregan que la información relativa a las circunstancias económicas de una persona, como la información patrimonial, está comprendida en el derecho de la privacidad, específicamente en lo que atañe su derivación en el derecho a la intimidad. Si bien entienden que de acuerdo al artículo 7 de la Constitución, los derechos pueden limitarse por ley y por razones de interés general, dicha limitación debe medirse con racionalidad y proporcionalidad, de forma que el fin perseguido por la ley pueda cumplirse sin atropellar los derechos de los individuos. -----

5.8 - Consideran que debe interpretarse debidamente los artículos 12 y 12 bis, en tanto la información que debe ser pública no es la relativa al cónyuge. Si bien los valores de transparencia, publicidad y combate a la corrupción son más que suficientes para afectar el derecho a la intimidad del funcionario obligado, no lo son para alcanzar, afectándolo, el derecho a la intimidad del cónyuge o concubino.

CONSIDERANDO: I) que, la Ley 17.060 de 23 de diciembre de 1998, conocida como ley anticorrupción, fue una clara muestra de compromiso a nivel país en la lucha contra la Corrupción en la Administración Pública, así como el compromiso mediante obligaciones asumidas por los funcionarios públicos en el ejercicio de su función. -----

II) que, los gobernantes, los altos cargos y los funcionarios públicos en general, tienen el deber de ofrecer una “imagen pública” definida como un conjunto de rasgos que los caracterizan como “servidores públicos”. Los “rasgos” de esa imagen están “normativizados” pues hay textos legales que dicen cuáles son válidos, y cuales no los son. El sistema de Declaraciones Juradas, permite obtener información sobre las actividades y los intereses económicos, comerciales, financieros y profesionales que tienen los funcionarios públicos. Al

partir de la información del cargo que ejerce, es posible detectar posibles situaciones de conflicto de interés y tomar los recaudos necesarios para evitar que sus decisiones carezcan de la objetividad necesaria. También permite controlar casos de “incompatibilidades”. -----

III) que, la ley mencionada, no sujeta su aplicabilidad -con relación a las declaraciones juradas de los funcionarios públicos- a si están o no casados, si tienen o no régimen de separación de bienes, si el matrimonio se celebró o no en nuestro país. Se orienta a lograr que sean los propios funcionarios públicos quienes mantengan la probidad en su actuar e incrementen su responsabilidad, estableciendo una obligación por parte de los jerarcas de la Administración Pública (entre otros), como forma de controlar un posible enriquecimiento ilícito de su parte. Obligación que comprende todos los bienes del declarante, su cónyuge, las personas sometidas a su patria potestad o tutela, su participación en todo tipo de sociedades y todo tipo de ingresos, así como deudas u obligaciones, con especificaciones detalladas de origen y fechas de adquisición. -----

IV) que, la propia Suprema Corte de Justicia expresó que el derecho a la Intimidad no es un derecho absoluto, el cual admite restricciones por razones de interés general. -----

V) que, la persona que voluntariamente, o por sus propios actos, elige dedicarse a la gestión del poder público, a causa de estar libre y espontánea elección, debe asumir un ámbito de protección menor en sus derechos de la personalidad. El hecho de dedicarse al “servicio del interés general” es la razón que justifica las injerencias. -----

VI) que, la Declaración Jurada de Bienes e Ingresos, establecida por Ley N.º 17060 de 23 de diciembre de 1998, constituye un mecanismo de importancia relevante dentro de los instrumentos con los que cuenta el país para luchar contra el fraude y la corrupción administrativa. Dice relación con la responsabilidad ética que deben asumir los futuros gobernantes y se vincula con los intereses de la ciudadanía en conocer el patrimonio de los políticos como eventuales servidores públicos. En este contexto, el servidor público, entre los cuales debemos incluir a quienes ocupen cargos electivos, debe actuar en todo



Junta de Transparencia y Ética Pública

momento en consideración del interés público, el que tiene que ver -de forma no taxativa- con los siguientes aspectos: buena fe, imparcialidad, rectitud, buena administración y adecuada satisfacción de necesidades colectivas. -----

VII) que, el hecho de que la ley permita conocer ciertos aspectos de la "vida privada" de un funcionario del Estado, como puede ser sus actividades personales y la constitución de un patrimonio económico; se debe a que ese avance sobre la intimidad se encuentra habilitado por dicha ley necesaria, idónea y proporcionada, la cual la Suprema Corte de Justicia ha considerado constitucional. -----

VIII) que, se trata de una única declaración – presentada por el funcionario obligado- con un único contenido que comprende lo relacionado al funcionario obligado y a su cónyuge/concubino/a, tal como está previsto en el artículo 28 y 30 del Decreto N° 354/994. -----

IX) que, la propia normativa no ofrece dudas en cuanto a que se trata de una obligación impuesta al funcionario obligado a la presentación y también al cónyuge/concubino/a que deberá completar los datos que le correspondan; no dejando librado a su decisión si desea o no proporcionar los mismos. -----

X) que, este Directorio comparte en todos sus términos lo expresado en el informe letrado. -----

ATENTO: a lo precedentemente expuesto. -----

EL DIRECTORIO DE LA JUNTA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA PÚBLICA

RESUELVE:

1º) **NO HACER LUGAR** al recurso de revocación, interpuesto por los Sres. Ache y [REDACTED] contra la Resolución N°1132bis/2024 de fecha 26 de setiembre de 2024, por los motivos esgrimidos en la parte expositiva de la presente resolución.

*Pincón 528, piso 8
Teléfono (598) 2 917 04 07
www.jutep.gub.uy*

2°) **PASAR** a Secretaría, cometiéndose la notificación de la presente a los recurrentes (Sres. ACHE y [REDACTED]). -----

3°) **COMUNICAR** a la Oficina de Declaraciones Juradas y a la Asesoría Letrada. -

4°) **FRANQUEAR** el recurso de Anulación interpuesto en subsidio por los recurrentes. -----

Firmado por:

Presidente Dra. Gabriela di Longo

Vicepresidente Cr. Guillermo Ortiz

*Dispuesto en la Sesión Ordinaria 15/2025, Acta 1085, de fecha 22 de abril del 2025.
Expediente Nro. 2024-34-1-0000320*